La Catástrofe

18- SEPT- 1986

Un Año Después

POR MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

Hace ya un año: el 19 de septiembre se convertirá a partir de ahora en el recuerdo luctuoso más hondamente arraigado en la conciencia de los mexicanos. Hace un año el destino nos deparó un tajo, una quebrazón no sólo física sino también moral, a la que sin embargo se sobrepuso la inmensa, colosal energía de la gente común.

Un año después, el balance de lo ocurrido en aquellas trágicas horas, y en el tiempo corrido desde entonces en las tareas de reconstrucción, no nos permite experimentar la satisfacción del deber cumplido. Todos hemos estado por debajo de lo que las circunstancias requerían. Hay un solo dato brutalmente conmovedor para hacer inequívoco este juicio: varios miles de personas siguen viviendo en los albergues provisionales. Han estado allí durante un año, de modo que puede asegurar que su tragedia no ocurrió el 19 de septiembre de 1985, sino que sólo empezó entonces. Ni siquiera puede saberse con precisión a cuánto asciende su número.

Es verdad que, en contraste, otros muchos miles de personas más están ahora ubicadas en viviendas nuevas. La mayor parte de ellas las edificó el gobierno, y otra porción provino de fondos administrados por la iglesia católica. Pero en este caso el enfoque correcto, socialmente, según me parece, es el del vaso medio vacío: es muy grave que a pesar del tiempo transcurrido no se haya dotado de un lugar donde vivir a miles de damnificados. La deuda con ellos es más pesada que la tarea cumplida respecto de quienes recibieron ya una habitación, aunque casi en ninguna circunstancia los beneficiarios hayan quedado por entero satisfechos. La lejanía, el costo, la carga financiera, la calidad, el espacio menor, la pérdida del entorno original, todo ello ha sido factor determinante para que las secuelas del sismo, aún en este caso, no hayan dejado de ser desagradables, para decirlo suavemente. Con todo, esas personas tienen de nuevo un lugar donde vivir. Pero quienes aún permanecen en albergues constituyen el peor saldo posible, desde el punto de vista humano y material.

En el deportivo Venustiano Carranza, por ejemplo, sobrevive un gran número de familias. Durante un año han estado allí, en condiciones de hacinamiento, de promiscuidad, de pérdida de la privacidad, que significa pérdida de la libertad. Es difícil, aún si en corto plazo se asignara a estas familias un sitio físicamente decoroso para radicarse que puedan retomar la normalidad en que vivían. El daño de la justicia demorada, es decir, de la injusticia, ya está hecho.

Pero quizá es todavía más grave, desde el punto de vista político, la deplorable consecuencia del terremoto que concierne a la manipulación de los intereses de los damnificados. El trato que el gobierno quiso darles, al principio, desencadenó la formación de agrupaciones, o la vivificación de otras que ya existían para distintos propósitos, y ello ha significado la movilización de miles de personas, ante la cual el gobierno, en general, ha reaccionado en el mejor de los casos tardíamente y, a menudo, con desconsideración hacia las personas.

Tlatelolco simboliza, en ese sentido, buena parte de lo que ha ocurrido. Reconocemos, naturalmente que lo allí ha pasado no es aplicable en lo general a todos los grupos de damnificados, entre otras cosas porque la enorme aglomeración residencial en el barrio más antiguo de la capital ha dispuesto de voceros inteligentes y diligentes, que han hecho conocer el desarrollo de los acontecimientos. Pero citamos el caso porque en él confluyen los elementos de esta abusiva manipulación política.

Al principio, el gobierno actuó como si fuese el culpable del sismo. Ocultando información, distorsionándola, hostigando a los afectados. La verdad era que algunas de sus dependencias eran responsables de condiciones que dieron al terremoto efectos terribles. El edificio Nuevo León, por ejemplo, que vino por tierra estrepitosamente en los primeros minutos consecuentes al sismo, estaba ya calificado como defectuoso antes del gran siniestro, y se había concertado con los inquilinos a un compromiso para someterlo a una recimentación. No haberla hecho a tiempo fue parte de la tragedia del 19 de septiembre. Allí murieron cientos de personas, cuya pérdida no puede ser atribuida sólo a la incuria administrativa —no debe perderse de vista la magnitud del movimientos telúrico— pero que acaso hubieran tenido una suerte distinta, a pesar del temblor si las cosas se hubieran hecho como se debe.

El debate sobre las responsabilidades en ese caso, así como la negativa de las autoridades en un primer momento para aceptar la carga financiera de la reconstrucción, tal como se ordena en los certificados de participación inmobiliaria, llevó a los vecinos a la organización, y a la participación conjunta en diversas luchas relacionadas con las secuelas del sismo, en la Coordinadora Unica de Damnificados. Organismo independiente, aunque dirigida por líderes izquierdistas, la CUD fue rápidamente puesta a competir por organizaciones levantadas al vapor por el PRI, y su sucursal, el PST.

También fue necesario para el gobierno, en el intento por impedir que las reclamaciones de los damnificados salieran de los márgenes tolerables para el propio gobierno, abandonar la línea original. Para ello fueron reemplazados varios funcionarios ligados con la cuestión, desde el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología hasta el Director del Programa de Habitación de Emergencia, pasando por el Delegado de Cuauhtémoc, la circunscripción más duramente castigada por el temblor. El nuevo titular de la SEDUE, político más moderno que su predecesor, escogió la vía de la concertación y el diálogo. No abandonó, pues no le es factible asumir tal iniciativa, y seguramente no le sería apetecible hacerlo, el control político de la cuestión y por consiguiente se mantuvo, así fuera aminorada, una tensión frente a los damnificados independientes, que se manifiesta en la visión contraria que ambos extremos sustentan sobre el estado de la reconstrucción y sus consecuencias.

La oposición entre autoridades y damnificados adquiere perfiles simbólicos al cumplirse un año. La CUD ha organizado una marcha que se propone llegar al Zócalo, pero éste ha sido considerado reserva exclusiva de los damnificados oficialistas. La movilización de la sociedad, empezando por los propios afectados inquietó tanto al gobierno que ahora, en este primer aniversario, busca hacerles saber que también esta movilización es susceptible de control y de cooptación.

Sería lamentable que estas tendencias gubernamentales se acentuaran. Todavía no están resueltos los problemas derivados del sismo propiamente como para erigir otros, nacidos de una deficiente manera de abordar las cuestiones aledañas. En eso consistiría el principal saldo político negativo de aquel acontecimiento que tanto cimbró la conciencia de los ciudadanos.

No percibir que los damnificados y quienes estuvieron cerca de ellos no pueden ver el país con la misma perspectiva con que lo apreciaban hace un año, es ignorar la magnitud de las secuelas sociales del temblor. Si se procede con base en esa ignorancia, sólo se engendrarán nuevos problemas, mucho más difíciles de resolver y aun de encarar que los que se pueden atender mediante recursos materiales.

Era inevitable la politización del terremoto. Hubiéramos podido sacar buenas lecciones de ese cataclismo y en consecuencia encauzar una sana, útil politización de sus efectos. No lo hemos conseguido, por el temor autoritario del gobierno a enfrentarse a grupos a los que no puede manipular. El dolor humano persistente, así, es un saldo negativo que a un año de distancia se une a la manipulación política como los principales efectos negros de aquella tragedia.